

Proceso

a la construcción

La tragedia de Almería trae de forma trágica a la actualidad un hecho que transforma en accidente lo que subyace como cotidianidad en ese negocio negro que se conoce con el

nombre de construcción. Sobre la patología descarnada de la ciudad capitalista, que nos va formulando a diario sus dosis de estupefactos consumistas y nos hacen ver casi como necesario del bien urbano la agresividad del medio, los problemas del tráfico, la polución, la promiscuidad habitacional, que a niveles más ilustrados nos completan con estudios y datos operativos, que nos reseñan como factores inherentes al desarrollo urbano, la asignación del suelo en estado bruto, la angustia urbana, la esclerosis de la interacción social.

La planificación, extraña y abstracta adreivación, «se aviene con el pensamiento de que en ciertos terrenos circunscritos rija el principio de la competencia, de la lucha, de la libre formación», y sobre este panorama adulador en justificaciones medra el interés más desmesurado y el pragmatismo más oportunista. Los vientos proféticos de los tecnócratas parecen paliar con sus técnicas agresivas unos defectos heredados del viejo sistema, estructurado por un capital liberal y en una técnica artesanal, pero en el fondo no son más que cortinas de humo de los ideólogos del cambio frente a las demandas de una realidad que reclama valor de uso.

La construcción en nuestro país no dispone de unos mecanismos reguladores que permitan un control coherente y preciso a sus márgenes de abuso. Sobre las asignaciones del suelo bruto sigue la ocupación del terreno como valor de mercancía; según que la acción del capital sea liberal, monopolístico o accionario, ninguna regulación ni control posterior rige los procesos constructivos. El promotor dirige, controla y regula todos los mecanismos que entran dentro del proceso. El proyecto técnico, en función de su planificación económica; los materiales, en orden a su valor de mercancía (la construcción en función del mercado es un dato recogido a diario en la prensa inmobiliaria). El uso del subsuelo (siempre que no existan ordenanzas reguladoras en cuanto a volumen a ocupar). Los procesos constructivos. Los tiempos de construcción. Los valores de mercado y los procesos de venta.

La empresa constructora puede ser constituida sin más garantía que las cotizaciones sociales de sus empleados. En el vasto panorama de nuestro desarrollo inmobiliario existen los ejemplos suficientes, donde el fraude, la incompetencia, el abuso y la ignorancia han levantado el suburbio habitacional en altura más lamentable de nuestra historia. La falta de control de regulación de unas ordenanzas que estructuran la empresa, con una tipología más industrial y una responsabilidad técnica controlada, hacen de la construcción un campo abonado para la improvisación, el abuso y el negocio más lucrativo del país. Con una mano de obra no instrumentalizada, con unos bajos niveles de adiestramiento, enclavados en la demografía del paro, sin una estructuración cualificada y, por supuesto, sin unos tiempos de aprendizaje, pasan de las estructuras agrarias más elementales al uso y la responsabilidad de las faenas de mayor responsabilidad, como son los trabajos de estructura, fábricas de comportamiento mecánico, remodelación de infraestructuras, etcétera. El peonaje en la construcción es el proletariado más marginado, con un salario mínimo y con una eventual-



La reciente tragedia de Almería, al igual que la ya olvidada de Los Angeles de San Rafael, vienen a poner en cuestión todo el proceso de la construcción.

idad laboral verdaderamente dramática, sin opciones a adiestramientos progresivos y con una incultura secular. Este proletariado marginado debe adaptarse a la gran instrumentalización técnica de la empresa por procesos intuitivos, por aproximaciones no controladas, por errores no verificados, creando en la base del proceso constructivo unas fuerzas que deterioran la calidad y ejecución de la obra.

La falta de verificación y experimentación de la obra realizada impide la verificación científica que lleva implícito todo proceso empírico, y la construcción, teórica y metodológicamente, es un proceso empírico. La racionalidad industrial, con todos los inconvenientes que en otros planos comporta, no ha tenido acceso a la industria de la construcción, que permanece como estructura casi artesanal en los procesos de explotación de la mano de obra no cualificada, sirviéndose de la herramienta industrial para abordar los procesos macroconstructivos dentro de lo que se podría denominar la racionalidad de organización, formulando así una contradicción bastante elocuente de medios y métodos contradictorios y antagónicos, creando así una racionalización parcial, una auténtica racionalidad de estrategia que facilite su determinismo final, la obra construida como mercancía.

En la plataforma de los técnicos al servicio de la empresa, ya sea ésta de una actividad privada (el trabajo liberal de algunos arquitectos e ingenieros, aparejadores o peritos), que aún se ejerce, o el trabajo controlado en la «gran empresa», su capacidad teórica y práctica está controlada por las minorías que poseen el poder de la empresa y que no ignoran que el precio de un profesional titulado debe ser cotizado con mayores márgenes que un peonaje no cualificado. Este primer eslabón de cotización desmesurada (existen márgenes de sueldos

doscientas veces mayor entre un profesional titulado y un peón de la construcción) crea unas distorsiones ético-sociológicas fáciles de comprobar. La acción científica, teórica o práctica, se encuentra vulnerada por el salario administrado, el trabajo del técnico, o se instala en las minorías rectoras de la empresa, o entra dentro del juego de la racionalidad de organización, dentro de unas leyes que no tienen opción dialéctica, de unos programas cualitativa y cuantitativamente establecidos, donde una acción teórica o una experimentación práctica no tendrán viabilidad; su trabajo se compra con un precio más alto, pero para un fin ya establecido.

Los índices de cotización que revierten sobre el profesional titulado no obedecen a leyes de altruismo tecnocrático, son estipulados para afrontar el riesgo y la catástrofe. La responsabilidad social y la moral paternalista del promotor o de las minorías rectoras de la empresa necesitan fijar una víctima responsable, y su ética social queda garantizada con la instrucción correspondiente. A nadie se le oculta la degradación a que han llegado determinadas profesiones relacionadas con el mundo de la construcción, degradación y envilecimiento en algunas ocasiones escandalosas, pero es un juego excesivamente provocador relegar la responsabilidad social de un acontecer perfectamente organizado para el lucro en la firma de un profesional, aunque en algunas ocasiones (y no es precisamente el caso del siniestro de Almería) estos profesionales sean cómplices de su incapacidad, incompetencia, irresponsabilidad profesional o su ambición desmedida.

Resulta verdaderamente irónico, si no fuera por la tragedia que lleva implícito, el contemplar y leer las notas de prensa de unas actividades y competencias profesionales que derrochan retórica en justipreciar sus privilegios

o sus demandas de participación, mientras la realidad arquitectónica, el control constructivo, la calidad de obra, la imagen realizada, ofrece un panorama tan desolador y desencantado como el que tenemos que compartir.

La intervención masiva de unos intereses está marcando una patología lo suficientemente aguda como para iniciar un proceso a la construcción en nuestro país, para aclarar unas fórmulas muy oscuras y equívocas, para regular desde la Administración, con una legislación coherente, un campo lleno de irresponsabilidades sociales, cívicas y de riesgo personal. La mecánica sensacionalista de ciertos medios de comunicación pone su acento en el dramatismo sensiblero de los hechos luctuosos, de los responsables que siempre se encuentran para justificar y llenar el turno de la noticia, pero debajo de estos siniestros, lamentables por todos los conceptos, permanece una superestructura de intereses que es necesario definir y diagnosticar.

Una división del trabajo y responsabilidades en los técnicos responsables; la presencia de titulados a pie de obra, que garantice un control de calidad de la misma; unas ordenanzas reguladoras del subsuelo en uso y ocupación; unos controles regulados de las condiciones mecánicas del suelo; comprobaciones periódicas de los procesos constructivos mediante ensayo en laboratorios estatales o privados; un aprendizaje forzoso, mediante cursillos de capacitación, para el obrero no cualificado, y, sobre todo, una legislación que estructure la empresa constructora, son cuestiones de urgencia que tendrá que abordar la Administración si no desea que los hechos de Almería o los que parecen ya olvidados de Los Angeles de San Rafael sean el comienzo de una serie de hechos totalmente inadmisibles. ■

ANTONIO F. ALBA.